INTERNATIONAL ASSOCIATION OF JUDGES
UNION INTERNATIONALE DES MAGISTRATS
UNIÓN INTERNACIONAL DE MAGISTRADOS
INTERNATIONALE VEREINIGUNG DER RICHTER
UNIONE INTERNAZIONALE DEI MAGISTRATI

PALAZZO DI GIUSTIZIA - PIAZZA CAVOUR - 00193 ROMA - ITALY

PRONUNCIAMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA UNION INTERNACIONAL DE MAGISTRADOS EN DEFENSA DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN EL PERU

SOBRE LA NO RATIFICACIÓN DEL MAGISTRADO OSWALDO ALBERTO ORDÓÑEZ ALCÁNTARA, LA DESTITUCIÓN DE LOS MAGISTRADOS RICHARD CONCEPCIÓN CARHUANCHO Y JUAN FIDEL TORRES TASSO, Y LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS SEGUIDOS CONTRA OTROS JUECES EN EL PERÚ

La IAJ-UIM es una organización internacional profesional y apolítica, fundada en 1953, que reúne asociaciones nacionales de jueces y juezas de 93 países y cuyo principal objetivo es salvaguardar la independencia de las autoridades judiciales, la que constituye un requisito esencial de la función judicial y una garantía del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

El Consejo Central manifiesta su profunda preocupación por la decisión de no ratificar al magistrado Oswaldo Alberto Ordóñez Alcántara, presidente de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima y presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú; por las decisiones de destitución adoptadas contra los magistrados Richard Augusto Concepción Carhuancho y Juan Fidel Torres Tasso; así como por los procedimientos disciplinarios iniciados o seguidos contra otros jueces peruanos con motivo de actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

Respecto del magistrado Oswaldo Alberto Ordóñez Alcántara, el Consejo Central recuerda que anteriormente expresó su preocupación por el inicio de una investigación preliminar de oficio como consecuencia de declaraciones efectuadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su condición de presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú y miembro del Consejo Consultivo de la Federación Latinoamericana de Magistrados. En aquella oportunidad, la IAJ-UIM advirtió que el inicio de procedimientos disciplinarios por declaraciones realizadas en el ejercicio legítimo de funciones asociativas podía constituir una afectación de los derechos de asociación y libertad de expresión de los jueces.

En ese contexto, la posterior decisión de no ratificar al magistrado Ordóñez Alcántara genera una especial preocupación, pues podría ser percibida como una consecuencia derivada de su actuación como representante de una asociación profesional de magistrados y de las opiniones expresadas en defensa de la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. La participación activa de un juez en una asociación profesional, así como la formulación de opiniones institucionales sobre asuntos relacionados con la administración de justicia, no deben ser utilizadas como elementos adversos en un procedimiento de evaluación y ratificación.

El Consejo Central manifiesta igualmente su preocupación por las destituciones de los magistrados Richard Augusto Concepción Carhuancho y Juan Fidel Torres Tasso, cuyas actuaciones

disciplinarias estarían vinculadas con decisiones y actuaciones efectuadas en el ejercicio de la función jurisdiccional.

La independencia judicial exige que los jueces puedan interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico y resolver los asuntos sometidos a su conocimiento con plena autonomía, sin temor a represalias, procedimientos disciplinarios, no ratificaciones o destituciones derivados del contenido o sentido de sus resoluciones. Esta independencia no constituye un privilegio personal de los jueces, sino una garantía fundamental de todas las personas que acuden al sistema de justicia.

El Consejo Central subraya que la potestad disciplinaria y los procedimientos de evaluación y ratificación no pueden convertirse en mecanismos paralelos de revisión de las decisiones judiciales ni ser utilizados para sancionar interpretaciones jurídicas que puedan resultar controvertidas. Los posibles errores de interpretación, motivación o aplicación del derecho deben ser corregidos mediante los recursos jurisdiccionales previstos por el ordenamiento jurídico, salvo que se acredite, con estricto respeto del debido proceso, una conducta dolosa, fraudulenta o manifiestamente ajena al legítimo ejercicio de la función judicial.

El Estatuto Universal del Juez, aprobado por la Unión Internacional de Magistrados, establece que ninguna presión, amenaza o injerencia, directa o indirecta, puede ejercerse sobre un juez y que las decisiones judiciales únicamente pueden ser revisadas mediante los recursos y procedimientos establecidos por la ley. Asimismo, reconoce el derecho de los jueces a integrar asociaciones profesionales para defender sus legítimos intereses y la independencia judicial. De manera similar, los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura establecen que los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y de conformidad con el derecho, sin restricciones, influencias indebidas, presiones, amenazas o intromisiones de cualquier sector o por cualquier motivo.

El Consejo Central advierte que la concurrencia, en un periodo próximo, de decisiones de no ratificación, destituciones y procedimientos disciplinarios contra jueces puede generar un grave efecto intimidatorio sobre la magistratura peruana. Esta situación podría provocar que los jueces condicionen el contenido de sus decisiones o limiten el ejercicio de sus derechos de expresión y asociación por temor a investigaciones, sanciones o a la pérdida definitiva de sus cargos.

En ese sentido, el Consejo Central **EXHORTA** al Gobierno y al Estado del Perú, dentro del marco de sus respectivas competencias y con pleno respeto de la separación de poderes, a adoptar las medidas institucionales y normativas necesarias para garantizar efectivamente la independencia judicial, proteger a los jueces frente a cualquier forma de intimidación o represalia y evitar que los procedimientos disciplinarios o de ratificación sean utilizados para revisar decisiones jurisdiccionales o restringir el legítimo ejercicio de los derechos de expresión y asociación.

Asimismo, **EXHORTA** a la Junta Nacional de Justicia del Perú y a los demás órganos competentes a respetar rigurosamente las garantías del debido proceso, la autonomía de criterio de los magistrados, la libertad de expresión y el derecho de asociación judicial; así como a garantizar que las decisiones de no ratificación y destitución puedan ser revisadas mediante recursos efectivos ante una autoridad independiente e imparcial.

Lisboa-Portugal, 18 de octubre de 2026.

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF JUDGES
UNION INTERNATIONALE DES MAGISTRATS
UNIÓN INTERNACIONAL DE MAGISTRADOS
INTERNATIONALE VEREINIGUNG DER RICHTER
UNIONE INTERNAZIONALE DEI MAGISTRATI

PALAZZO DI GIUSTIZIA - PIAZZA CAVOUR - 00193 ROMA - ITALY

STATEMENT OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF JUDGES IN DEFENCE OF JUDICIAL INDEPENDENCE IN PERU

CONCERNING THE NON-RECONFIRMATION OF JUDGE OSWALDO ALBERTO ORDÓÑEZ ALCÁNTARA, THE DISMISSAL OF JUDGES RICHARD CONCEPCIÓN CARHUANCHO AND JUAN FIDEL TORRES TASSO, AND DISCIPLINARY PROCEEDINGS AGAINST OTHER JUDGES IN PERU

The International Association of Judges (IAJ) is an international, professional and non-political organisation, founded in 1953, which brings together national associations of judges from 93 countries. Its principal objective is to safeguard judicial independence, which is an essential requirement for the exercise of judicial functions and a guarantee of respect for human rights and fundamental freedoms.

The Central Council expresses its deep concern over the decision not to reconfirm Judge Oswaldo Alberto Ordóñez Alcántara, President of the First Constitutional Chamber of the Superior Court of Justice of Lima and President of the National Association of Judges of Peru; the decisions to dismiss Judges Richard Augusto Concepción Carhuancho and Juan Fidel Torres Tasso; and the disciplinary proceedings initiated or pursued against other Peruvian judges in connection with actions taken in the exercise of their judicial functions.

With regard to Judge Oswaldo Alberto Ordóñez Alcántara, the Central Council recalls that it had previously expressed concern over the initiation of a preliminary investigation *ex officio* following statements made before the Inter-American Commission on Human Rights in his capacity as President of the National Association of Judges of Peru and a member of the Advisory Council of the Latin American Federation of Judges. On that occasion, the IAJ warned that the initiation of disciplinary proceedings on account of statements made in the legitimate exercise of responsibilities within judicial associations could undermine judges' rights to freedom of association and freedom of expression.

In this context, the subsequent decision not to reconfirm Judge Ordóñez Alcántara gives rise to particular concern, as it could be perceived as a consequence of his activities as a representative of a professional association of judges and of the opinions he expressed in defence of the independence of the Judiciary and the Public Prosecutor's Office. A judge's active participation in a professional association, as well as the expression of institutional views on matters relating to the administration of justice, must not be used to their detriment in evaluation and reconfirmation proceedings.

The Central Council also expresses its concern over the dismissal of Judges Richard Augusto Concepción Carhuancho and Juan Fidel Torres Tasso, whose disciplinary proceedings reportedly relate to decisions and actions taken in the exercise of their judicial functions.

Judicial independence requires that judges be able to interpret and apply the law and decide the cases brought before them with full autonomy, without fear of reprisals, disciplinary proceedings, non-reconfirmation or dismissal arising from the content or outcome of their decisions. Such

independence is not a personal privilege of judges, but a fundamental guarantee for all those who seek justice before the courts.

The Central Council emphasises that disciplinary powers and evaluation and reconfirmation procedures must not become parallel mechanisms for reviewing judicial decisions, nor may they be used to sanction legal interpretations that may be controversial. Any errors in the interpretation, reasoning or application of the law must be corrected through the judicial remedies provided for by the legal system, unless intentional misconduct, fraudulent conduct or conduct manifestly incompatible with the legitimate exercise of judicial functions is established, with strict respect for due process.

The Universal Charter of the Judge, adopted by the International Association of Judges, provides that no pressure, threat or interference, whether direct or indirect, may be exerted upon a judge and that judicial decisions may be reviewed only through the appeals and procedures established by law. It also recognises the right of judges to join professional associations in order to defend their legitimate interests and judicial independence. Similarly, the United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary establish that judges shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance with the law, without any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason.

The Central Council warns that the occurrence, within a relatively short period, of decisions not to reconfirm judges, dismissals and disciplinary proceedings against judges may have a serious intimidating effect on the Peruvian judiciary. This situation could lead judges to adjust the content of their decisions or restrict the exercise of their rights to freedom of expression and association for fear of investigations, sanctions or the permanent loss of their positions.

Accordingly, the Central Council **CALLS UPON** the Government and the State authorities of Peru, within their respective spheres of competence and with full respect for the separation of powers, to adopt the institutional and legislative measures necessary to effectively guarantee judicial independence, protect judges against any form of intimidation or retaliation, and prevent disciplinary or reconfirmation procedures from being used to review judicial decisions or restrict the legitimate exercise of the rights to freedom of expression and association.

The Central Council further **CALLS UPON** the National Board of Justice (*Junta Nacional de Justicia*) of Peru and all other competent authorities to strictly respect the guarantees of due process, judges' independence of judgment, freedom of expression and the right of judicial association, and to ensure that decisions concerning non-reconfirmation and dismissal are subject to effective review by an independent and impartial authority.

Lisbon, Portugal, 18 October 2026.

Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour, 00193 Roma, Italy
Tel.: +39 06 6883 2213 fax: +39 06 6871195
e-mail: secretariat@iaj-uim.org web: https://www.iaj-uim.org

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF JUDGES
UNION INTERNATIONALE DES MAGISTRATS
UNIÓN INTERNACIONAL DE MAGISTRADOS
INTERNATIONALE VEREINIGUNG DER RICHTER
UNIONE INTERNAZIONALE DEI MAGISTRATI

PALAZZO DI GIUSTIZIA - PIAZZA CAVOUR - 00193 ROMA - ITALY

DÉCLARATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'UNION INTERNATIONALE DES MAGISTRATS EN DÉFENSE DE L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE AU PÉROU

CONCERNANT LE NON-RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU MAGISTRAT OSWALDO ALBERTO ORDÓÑEZ ALCÁNTARA, LA RÉVOCATION DES MAGISTRATS RICHARD CONCEPCIÓN CARHUANCHO ET JUAN FIDEL TORRES TASSO, AINSI QUE LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES ENGAGÉES CONTRE D'AUTRES JUGES AU PÉROU

L'Union internationale des magistrats (UIM) est une organisation professionnelle internationale et apolitique, fondée en 1953, qui regroupe des associations nationales de magistrats de 93 pays et dont l'objectif principal est de préserver l'indépendance du pouvoir judiciaire, condition essentielle de l'exercice de la fonction juridictionnelle et garantie du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le Conseil central exprime sa profonde préoccupation face à la décision de ne pas renouveler le mandat du magistrat Oswaldo Alberto Ordóñez Alcántara, président de la Première Chambre constitutionnelle de la Cour supérieure de justice de Lima et président de l'Association nationale des magistrats du Pérou ; aux décisions de révocation prises à l'encontre des magistrats Richard Augusto Concepción Carhuancho et Juan Fidel Torres Tasso ; ainsi qu'aux procédures disciplinaires engagées ou poursuivies contre d'autres juges péruviens en raison d'actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

S'agissant du magistrat Oswaldo Alberto Ordóñez Alcántara, le Conseil central rappelle qu'il avait précédemment exprimé sa préoccupation concernant l'ouverture d'une enquête préliminaire d'office à la suite de déclarations faites devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme, en sa qualité de président de l'Association nationale des magistrats du Pérou et de membre du Conseil consultatif de la Fédération latino-américaine des magistrats. À cette occasion, l'UIM avait averti que l'engagement de procédures disciplinaires en raison de déclarations faites dans l'exercice légitime de responsabilités associatives pouvait porter atteinte aux droits des juges à la liberté d'association et à la liberté d'expression.

Dans ce contexte, la décision ultérieure de ne pas renouveler le mandat du magistrat Ordóñez Alcántara suscite une préoccupation particulière, dans la mesure où elle pourrait être perçue comme une conséquence de son action en tant que représentant d'une association professionnelle de magistrats et des opinions exprimées en défense de l'indépendance du pouvoir judiciaire et du ministère public. La participation active d'un juge à une association professionnelle, de même que l'expression de positions institutionnelles sur des questions relatives à l'administration de la justice, ne doivent pas être retenues à son détriment dans le cadre d'une procédure d'évaluation et de renouvellement de mandat.

Le Conseil central exprime également sa préoccupation concernant la révocation des magistrats Richard Augusto Concepción Carhuancho et Juan Fidel Torres Tasso, les procédures disciplinaires

les concernant semblant être liées à des décisions et à des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

L'indépendance de la justice exige que les juges puissent interpréter et appliquer le droit et statuer sur les affaires qui leur sont soumises en toute autonomie, sans craindre de représailles, de procédures disciplinaires, de décisions de non-renouvellement de leur mandat ou de révocations motivées par le contenu ou le sens de leurs décisions. Cette indépendance ne constitue pas un privilège personnel des juges, mais une garantie fondamentale pour toutes les personnes qui s'adressent à la justice.

Le Conseil central souligne que le pouvoir disciplinaire ainsi que les procédures d'évaluation et de renouvellement de mandat ne sauraient devenir des mécanismes parallèles de réexamen des décisions judiciaires ni être utilisés pour sanctionner des interprétations juridiques susceptibles de susciter la controverse. Les éventuelles erreurs d'interprétation, de motivation ou d'application du droit doivent être corrigées au moyen des voies de recours juridictionnelles prévues par la loi, sauf lorsqu'un comportement intentionnellement fautif, frauduleux ou manifestement étranger à l'exercice légitime de la fonction judiciaire est établi dans le strict respect des garanties d'une procédure régulière.

Le Statut universel du juge, adopté par l'Union internationale des magistrats, dispose qu'aucune pression, menace ou ingérence, directe ou indirecte, ne peut être exercée sur un juge et que les décisions judiciaires ne peuvent être réexaminées que par les voies de recours et les procédures prévues par la loi. Il reconnaît également le droit des juges d'adhérer à des associations professionnelles afin de défendre leurs intérêts légitimes et l'indépendance de la justice. De même, les Principes fondamentaux des Nations Unies relatifs à l'indépendance de la magistrature établissent que les magistrats règlent les affaires dont ils sont saisis impartialement, d'après les faits et conformément à la loi, sans restriction et sans être l'objet d'influences indues, d'incitations, de pressions, de menaces ou d'interventions de quelque origine ou pour quelque raison que ce soit.

Le Conseil central avertit que la succession, sur une période rapprochée, de décisions de non-renouvellement de mandat, de révocations et de procédures disciplinaires visant des juges peut produire un grave effet d'intimidation sur la magistrature péruvienne. Cette situation pourrait conduire les juges à adapter le contenu de leurs décisions ou à restreindre l'exercice de leurs droits à la liberté d'expression et d'association par crainte d'enquêtes, de sanctions ou de la perte définitive de leurs fonctions.

En conséquence, le Conseil central **EXHORTE** le Gouvernement et les autorités de l'État péruvien, dans le cadre de leurs compétences respectives et dans le plein respect de la séparation des pouvoirs, à adopter les mesures institutionnelles et normatives nécessaires pour garantir effectivement l'indépendance de la justice, protéger les juges contre toute forme d'intimidation ou de représailles et empêcher que les procédures disciplinaires ou de renouvellement de mandat soient utilisées pour réexaminer des décisions juridictionnelles ou restreindre l'exercice légitime des droits à la liberté d'expression et d'association.

Il **EXHORTE** également la Junta Nacional de Justicia du Pérou et les autres autorités compétentes à respecter rigoureusement les garanties d'une procédure régulière, l'indépendance de jugement des magistrats, la liberté d'expression et le droit d'association des juges, ainsi qu'à garantir que les décisions de non-renouvellement de mandat et de révocation puissent faire l'objet de recours effectifs devant une autorité indépendante et impartiale.

Lisbonne, Portugal, le 18 octobre 2026.